

Cesión de datos de profesionales a una Corporación. Informe 0044/2005

La consulta plantea si resulta conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de Carácter Personal, la comunicación a la Corporación consultante por parte de la Administración Sanitaria de la Región (...). de los datos correspondientes a los médicos que trabajan para el Servicio Salud, a fin de incorporarlos a los registros que la Corporación ha de crear en cumplimiento de lo establecido en la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de Profesiones Sanitarias.

La transmisión de los datos a los que se refiere la consulta constituye una cesión o comunicación de datos de carácter personal, definida por el artículo 3 i) de la Ley Orgánica 15/1999 como “Toda revelación de datos realizada a una persona distinta del interesado”.

Tratándose de una cesión de datos, el artículo 11.1 de la Ley Orgánica 15/1999 dispone que “Los datos de carácter personal objeto del tratamiento sólo podrán ser comunicados a un tercero para el cumplimiento de fines directamente relacionados con las funciones legítimas del cedente y del cesionario con el previo consentimiento del interesado”. No obstante, este consentimiento no será preciso “cuando la cesión está autorizada en una Ley” (artículo 11.2 a).

El artículo 4.2 de la Ley 44/2003 establece que “El ejercicio de una profesión sanitaria, por cuenta propia o ajena, requerirá la posesión del correspondiente título oficial que habilite expresamente para ello o, en su caso, de la certificación prevista en el artículo 2.4, y se atenderá, en su caso, a lo previsto en ésta, en las demás leyes aplicables y en las normas reguladoras de los colegios profesionales”.

A su vez, el artículo 5.2 de la propia Ley dispone que “Para garantizar de forma efectiva y facilitar el ejercicio de los derechos a que se refiere el apartado anterior, los colegios profesionales, consejos autonómicos y consejos generales, en sus respectivos ámbitos territoriales, establecerán los registros públicos de profesionales que, de acuerdo con los requerimientos de esta Ley, serán accesibles a la población y estarán a disposición de las Administraciones sanitarias. Los indicados registros, respetando los principios de confidencialidad de los datos personales contenidos en la normativa de aplicación, deberán permitir conocer el nombre, titulación, especialidad, lugar de ejercicio y los otros datos que en esta Ley se determinan como públicos”.

La incorporación a dichos registro únicamente queda exceptuada en los términos previstos en la Disposición adicional sexta, según la cual “Por motivos de seguridad pública, podrán no resultar aplicables los principios establecidos en los párrafos d) y e) del artículo 5.1 de esta Ley, ni ser de carácter público el registro establecido en su artículo 5.2”.

El problema, tal y como indica la consulta, se desprende de lo establecido en el artículo 6 de la Ley 6/1999, de la Región (...) de 4 de noviembre.

El mencionado precepto, tras señalar en su apartado 2 que “Es requisito indispensable para el ejercicio de las profesiones colegiadas la incorporación al colegio en cuyo ámbito territorial se pretenda ejercerla”, añade en su apartado 4 que “Los profesionales titulados, vinculados con alguna de las administraciones públicas en la Región (...) mediante relación de servicios de carácter administrativo o laboral, no precisarán estar colegiados para el ejercicio de funciones puramente administrativas, ni para la realización de actividades propias de la correspondiente profesión por cuenta de aquellas, cuando el destinatario inmediato de las mismas sea exclusivamente la Administración. Sí será obligatoria, por tanto, la colegiación cuando el destinatario de la actividad profesional no sea exclusivamente la Administración y existan también particulares que sean destinatarios de dicha actividad. En estos casos, la Administración ejercerá la potestad disciplinaria sobre los mismos”.

De este modo, la interpretación que haya de darse a la regla contenida en el mencionado artículo 6.4 resulta esencial, dado que en caso de implicar el mismo una exclusión del deber de colegiación de los médicos que presten sus servicios exclusivamente en la sanidad pública, la cesión no podría ampararse en la existencia de una norma con rango de Ley habilitante de la misma, mientras que en caso contrario, la cesión se encontraría amparada por el artículo 11.2 a) de la Ley Orgánica 15/1999, en relación con el artículo 5.2 de la Ley 44/2003 y con el propio artículo 6.2 de la Ley autonómica 6/1999.

Pues bien, sin perjuicio de la interpretación que al precepto pudiera darse por parte de los órganos de la Administración autonómica de la Región (...), la previsión contenida en el artículo 6.4 de la Ley 6/1999 exige la concurrencia acumulada de una serie de requisitos:

- La vinculación con alguna de las administraciones públicas en la Región (...) mediante relación de servicios de carácter administrativo o laboral.

- El ejercicio de funciones puramente administrativas o la realización por cuenta de dicha Administración de actividades propias de la correspondiente profesión,
- Que destinatario inmediato de las actividades o funciones desarrolladas “sea exclusivamente la Administración”.

Por el contrario, la propia norma señala que sí será obligatoria la colegiación “cuando el destinatario de la actividad profesional no sea exclusivamente la Administración y existan también particulares que sean destinatarios de dicha actividad”, sin perjuicio de la potestad disciplinaria que corresponda a la Administración.

Por tanto, dado el contenido de la profesión médica, la previsión contenida en el artículo 6.4 de la Ley 6/1999 únicamente sería aplicable en el supuesto en que el licenciado en medicina no ejerciera una actividad que implique el tratamiento y diagnóstico de paciente alguno.

Por el contrario, en caso de desarrollarse la actividad propia de la profesión médica, que por su propia naturaleza implica la atención a un paciente, obviamente distinto de la Administración Sanitaria a la que el facultativo preste sus servicios y que implica, según establece el artículo 5.1 e) de la Ley 44/2003, el deber de los profesionales y los responsables de los centros sanitarios de facilitar “a sus pacientes el ejercicio del derecho a conocer el nombre, la titulación y la especialidad de los profesionales sanitarios que les atienden, así como a conocer la categoría y función de éstos, si así estuvieran definidas en su centro o institución”, es obvio que no concurriría el tercero de los requisitos exigidos por el artículo 6.4 de la Ley 6/1999.

En consecuencia, a juicio de esta Agencia, la cesión de los datos a la que se refiere la consulta se encontrará amparada por el artículo 11.2 a) de la Ley Orgánica 15/1999, en conexión con el artículo 5 de la Ley 44/2003 y con el artículo 6.2 de la Ley 6/1999 en caso de que el profesional médico desarrolle cualquier tipo de actividad propia de la profesión médica que implique una relación del mismo, en el ejercicio de su profesión, con los pacientes.